

## **Cesión de datos de evaluación de profesorado. Informe 37/2006**

La consulta plantea si procede la cesión de datos referentes a los resultados de encuestas anónimas de evaluación del profesorado a los órganos encargados de velar por la calidad y el adecuado desarrollo de las enseñanzas impartidas en la Universidad, haciendo expresa referencia a las comisiones establecidas por el artículo 53 de los estatutos de la propia Universidad y, en particular, a las Comisiones de Docencia y las Comisiones de Calidad de la Docencia, si bien las mismas no han sido constituidas como tales, según indica la consulta.

Como cuestión previa, deben efectuarse determinadas consideraciones relativas al sometimiento del tratamiento al que se refiere la consulta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En este sentido, el artículo 2.1, párrafo primero de la Ley dispone que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, tal y como dispone el artículo 3 a).

En el presente caso, con independencia de que no sean conocidos los datos de quienes dan respuesta a las encuestas no cabe duda que nos encontraremos ante datos de carácter personal referidos al profesorado respecto del que se efectúa la encuesta, toda vez que se vincularán los resultados de la evaluación a cada afectado concreto objeto de aquélla.

En consecuencia, el tratamiento de los datos quedará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, debiendo indicar que, en lo referente a la exactitud de los datos, consagrada por el artículo 4.3 de la Ley Orgánica, la misma existirá siempre que los datos correspondan a la valoración efectivamente realizada, dado que en ese punto ha de considerarse que concluiría la responsabilidad de quien trata los datos, sin perjuicio de la fiabilidad que hubiera de otorgarse a los resultados de la encuesta en virtud del carácter más o menos técnico de las cuestiones planteadas y los conocimientos del alumnado que responde al cuestionario de evaluación.

Respecto de la comunicación de los datos a distintos órganos universitarios, la propia consulta recuerda la opinión de esta Agencia, manifestada en su informe de 21 de diciembre de 2005, emitido a instancia del Defensor Universitario, en que se señala que la transmisión de los datos, sometidos como se ha dicho a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, supondrá una cesión o comunicación de datos.

Respecto de la misma ya se indicó que se encontrarían amparadas en lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2003, en conexión con lo previsto en los Estatutos de la Universidad, las cesiones que la consulta planteaba, siendo

ahora preciso aclarar la consulta en cuanto a qué órganos deberían ser destinatario concretos de los datos en cada caso.

El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

En consecuencia, el tratamiento devendrá lícito cuando el mismo corresponda al cumplimiento de las finalidades legítimamente predicables de quien procede a dicho tratamiento. En este mismo sentido, el primer inciso del artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario”.

En el ámbito de las Administraciones Públicas y de los organismos vinculados o dependientes de las mismas la materialización del principio de finalidad se verifica a través del principio de competencia, de modo que podrán ser tratados los datos por quien legítimamente tenga la competencia para proceder a ese tratamiento y siempre respetando los restantes principios contenidos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Precisamente por ese motivo, el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, interpretado a sensu contrario, habilita la cesión de datos entre Administraciones Públicas cuando la cesión se realice en el ejercicio de una misma competencia.

Pues bien, completando lo indicado en el informe de esta Agencia de 21 de diciembre de 2001, el destinatario de los datos en cada caso habrá de ser el órgano al que se encomiende en cada supuesto el control del adecuado desarrollo de las actividades formativas dentro de las Facultades, Escuelas y, dentro de las mismas, Departamentos, del Centro Universitario.

De los preceptos de los Estatutos transcritos en la consulta no se desprende de modo unívoco que las Comisiones a las que la misma se refiere tengan atribuidas competencias tales que permitan considerar legítimo el tratamiento de los datos resultantes de las evaluaciones, por lo que, a la vista de dichos preceptos, la comunicación de los datos a dichas comisiones no se encontraría amparada por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.